

Las medidas contra el déficit recaudan 11.906 millones

Hacienda cifra en 11.906 millones de euros el impacto recaudatorio, hasta el mes de julio, de las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy para reducir el déficit público. Según consta en el informe de recaudación de la Agencia Tributaria correspondiente a julio, estas iniciativas, entre las que destacan la subida del IVA y el llamado gravamen complementario del IRPF, han permitido al Estado mantener los ingresos en los mismos niveles del año pasado, con 96.214 millones de euros. La recaudación del mes de julio fue de 24.728 millones, un avance interanual del 9,2%.

La economía alternativa mueve unos 220 millones

El movimiento de la economía alternativa y solidaria, que lleva casi dos décadas de andadura en España, mueve alrededor de 220 millones de euros anuales e involucra a 18.500 personas. La crisis ha propiciado su crecimiento y que sea más conocido por la sociedad. Este sistema alternativo de organización se basan en el fomento del comercio local, el reparto equitativo de la riqueza y la no acumulación de divisas, además de apostar por la producción artesanal y ecológica de bienes y servicios. En el proyecto ya participan 15 redes nacionales y 322 empresas o entidades como ONG o bancos del tiempo, coordinadas por la Red de redes de economía alternativa y solidaria (REAS).

Crédito | El Gobierno se la juega en el objetivo de lograr un repunte de la actividad de unas empresas que representan el 95% del tejido productivo por sociedades y el 63% del total del empleo en España

El reto de financiar a las pymes

El asunto ocupa un lugar predominante en la agenda del Gobierno en su retorno al trabajo tras las vacaciones. Las pequeñas y medianas empresas, así clasificadas con criterios de la Unión Europea cuando tienen plantillas inferiores a 250 trabajadores, representan el 95% de las sociedades constituidas en España y también algo más del 63% del empleo total.

El Ejecutivo es consciente de que, por mucho que las grandes salven los muebles y presenten cuentas con resultados positivos gracias a la actividad en el exterior, o por las plusvalías generadas por la venta de sus negocios en el extranjero, será la resurrección de las pymes de todo tipo —industriales, exportadoras, tecnológicas, del pequeño comercio o del servicio a las empresas— la que marque el verdadero signo de la recuperación.

Las pymes necesitan, para su relanzamiento, además del repunte de la demanda nacional —de consumo e inversión, ambas muy deprimidas—, el restablecimiento del flujo del crédito. Lo están pidiendo a gritos, e instituciones en apariencia tan distantes como el Banco Central Europeo (BCE) han percibido esta necesidad.

De momento, en el horizonte flota el más reciente mensaje de apoyo del presidente del BCE, Mario Draghi, en su día recibido como un bálsamo por el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy. Pero hay pocos visos de efectividad en el anuncio de su iniciativa, cierta-

mente compleja, basada en la futura aceptación de los ABS vinculados a pymes como contrapartida un poco más barata para la financiación bancaria.

Los ABS son paquetes de activos financieros, en este caso créditos, aceptados como garantía cuando una institución proporciona recursos a otra. Este tipo de titulizaciones, o cesión de los derechos de cobro, se ganaron muy mala fama con la crisis, y parece un recurso limitado que la banca pueda obtener facilidades de financiación del BCE por esta vía al conceder más créditos a las pymes. Con todo, los dirigentes de bancos españoles no descartan este mecanismo.

Más eficaz podría resultar la reciente línea de actuación del Gobierno que busca adaptar las pautas comunitarias a la realidad empresarial española. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado el propósito de que una futura norma modifique la definición de pyme, con la intención de facilitar que llegue el crédito a la economía real.

Criterios de cómputo

Lo cierto es que hasta ahora, y con la vista puesta en una realidad empresarial muy fragmentada, el Banco de España ha venido considerando pyme a una entidad en la que se conjugan un número de trabajadores reducido (menos de 250 empleados) con una facturación máxima de 50 millones de euros. Para las entidades financieras resulta muy interesante elevar el lis-

CUATRO INICIATIVAS

Banco Central Europeo. Es el garante del funcionamiento de los mercados financieros. Investiga cómo mejorar la aportación de recursos a las pymes por la vía de la aceptación de ABS (productos financieros complejos) como contrapartidas de préstamos titulizados.

Un mercado propio. El mercado de renta fija para pymes, el MARF, está listo para acoger las primeras emisiones. Pero no será accesible a todas: la emisión mínima rondará los 20 millones (se considera la cuantía necesaria para asegurar la liquidez a los inversores).

Préstamos de particulares. La fórmula está muy poco explorada, pero ya hay plataformas de particulares dispuestos a prestar en la medida en que los proyectos resulten convincentes. Hay desde firmas de capital riesgo a 'business angels'.

Vía tradicional. Las pymes pueden aprovechar el nicho de financiación que han dejado otras actividades, o la menor exigencia de capital para la banca que van a conllevar estos préstamos.

tón, porque financiar a las pymes saldrá, desde el punto de vista del acuerdo de exigencias de capital Basilea III, más barato que prestar dinero a otros agentes.

Este acuerdo de capital exigido a las instituciones financieras tiene un horizonte relativamente largo. Por eso parece más probable que el Gobierno haya decidido cambiar las normas tomando en cuenta que están en el aire 20.000 millones de financiación del Banco Europeo de Inversiones para pymes. Si no se modifica la clasificación, la base de empresas candidatas españolas a acceder a estos fondos se vería muy limitada.

A las agrupaciones empresariales esto les ha parecido poco más que un brindis al sol. Si España reconoce que tiene un tejido de microempresas, ¿por qué las administraciones no lo aceptan y dan un tratamiento más favorable a las minisociedades, sea desde el punto de vista fiscal o comercial? Y, sobre todo, reclaman un papel más activo de la banca nacionalizada y de la agencia del Gobierno, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), para sacar adelante a estas entidades. Al ICO le preocupa la elevada morosidad en el sector y las provisiones que debe aplicar a las líneas de financiación de pymes.

La pyme también está en el punto de mira de la banca, que pone en ella el foco de su negocio pero reconociendo que constituye el principal objetivo de vigilancia de sus unidades de control de riesgo.

M. J. ALEGRE

Pioneros en el transporte pesado con camiones de motor a gas en Aragón

Vía Augusta ha empezado este mes a prestar servicio con un vehículo Iveco que funciona con metano

ZARAGOZA. A los 160 camiones de la flota de Vía Augusta se ha sumado un nuevo vehículo, un Iveco Stralis Natural Power de 330 caballos, cuya peculiaridad es que su motor no consume gasoil, sino gas natural vehicular licuado (GNL). «Hemos hecho con él 4.000 kilómetros en las dos últimas semanas, tanto con mercancías convencionales como peligrosas», detalla Ramón Pascual, propietario de la empresa, que señala como su principal ventaja el ahorro en combustible. «El coste kilométrico es un 25% más barato», asegura Pascual.

Dos posibles inconvenientes se presentan a priori: el precio superior de compra de uno de estos vehículos y el repostaje, por el limitado número de estaciones de servicio 'metaneras'. Sobre lo primero, Blas Royo, jefe de taller de

Vía Augusta, señala que «son más caros pero se puede amortizar el sobrecoste de compra en dos años si haces más de 120.000 kilómetros». A partir de ahí, el ahorro en combustible «sigue y baja los costes de operación», indica Ramón Pascual.

En cuanto a lo segundo, Pascual señala que cada vez hay más puntos distribuidores en nuestro país. Cita no solo Barcelona y Madrid, sin también Lérida, Pamplona, Tarragona, Castellón, Vitoria, Cuenca, Valencia... En Zaragoza hay desde el pasado mes de mayo, cuando su empresa inauguró Vía Gas, una estación de servicio de gas licuado y gas comprimido (GNC) situada en la autopista A-2, junto al polígono Malpica. Este surtidor, construido al alimón con la empresa guipuzcoana Transportes Vicuña, garantiza no solo su propio suministro, sino el de cualquier usuario, ya que está abierto al público en general. Por él han pasado ya más de 200 turismos y furgonetas que han repostado 14.000 kilos de gas (se vende así, no en litros).



El camión Iveco con motor de gas, repostando en la 'metanera' Vía Gas de Zaragoza. ASIER ALCORTA

Los vehículos ligeros emplean GNC pero los pesados, explica Pascual, usan GNL (a una temperatura de -140°C), porque «así se puede almacenar más energía en menos volumen, que hace falta para transporte a larga distancia. Lo llevan en depósitos al vacío, como inmensos termos». Su Iveco, precisa, tiene una capacidad de 240 kilos «que dan una autonomía de

700 kilómetros», más otros 200 si se suma la reserva (cuatro botellas con 80 kilos de GNC).

Pascual dice que este tipo de vehículos «no ha despertado aún interés en Aragón, pero en Madrid y Barcelona ya no compran de gasoil». En Europa, a principios de este año había apenas 400, pero en EE. UU. se superaban los 6.000, según datos de Natural Gas Vehic-

le Association (GNVA). Y es que, según agrega Pascual, hay más ventajas: el precio del gas sufre menos fluctuaciones que el de las gasolinas y gasóleos porque el suministro está más diversificado geográficamente, y medioambientalmente «el metano es más limpio, emite menos gases contaminantes y no hay emisión de partículas».

REBECA CARTAGENA